

73

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO  
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ  
SECCION SEGUNDA**

Bogotá, D.C., 12 JUN 2018

**PROCESO:** 110013331-021-2018-00142-00  
**DEMANDANTE:** ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -  
COLPENSIONES  
**DEMANDADO:** DANNA ESTEFANÍA CASTAÑEDA

Entra al Despacho el MEDIO DE CONTROL DE LESIVIDAD, instaurado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en contra de la señora DANNA ESTEFANÍA CASTAÑEDA, para resolver la medida cautelar presentada por la parte actora.

**I.- MEDIDA CAUTELAR DE LA SUSPENSION PROVISIONAL DEL  
ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO.**

El apoderado Judicial de la parte actora – ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, presenta MEDIDA CAUTELAR (fls. 1 al 20) de suspensión provisional de los efectos de la Resolución GNR 6090 del 31 de enero de 2013 y GNR 197610 del 2 de julio de 2015, mediante los cuales la entidad ordena el reconocimiento de pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor CASTAÑEDA PINZON EDGAR, a favor de la señora CASTAÑEDA QUINCHIA DANNA ESTEFANÍA, identificada con la C.C. 1.022.395.551, en calidad de Hijo Mayor en cuantía mensual de \$566.700, efectiva a partir del 27 de mayo de 2012 y el segundo: ordena redistribuir el pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor CASTAÑEDA PINZON EDGAR, ya identificado a favor de CASTAÑEDA PALACIOS KEVIN ANDRES, identificado con la tarjeta de identidad N° 1.193.490.688, en calidad de hijo menor de edad del causante en un 25% de \$566.700, efectiva a partir del 27 de mayo de 2012; a favor de CASTAÑEDA PALACIOS

94

CHRISTIAN EFREN identificado con tarjeta de identidad No. 99020615580 en calidad de hijo menor de edad del causante en un 25% de \$566.700, efectiva a partir del 27 de mayo de 2012; a favor de CASTAÑEDA URIBE NICOLAS identificado con tarjeta de identidad N<sup>a</sup> 99092002540 en calidad de hijo menor de edad del causante en un 25% de \$566.700, efectiva a partir del 27 de mayo de 2012; y dejar en suspenso el derecho que le pudiera corresponder a favor de CASTAÑEDA QUINCHIA DANNA ESTEFANIA el 25% de \$566.700, a partir del 01 de abril de 2015 hasta tanto allegue a la entidad certificaciones vigentes de escolaridad de los semestres de enero de 2015 a junio de 2015 y de julio de 2015 a diciembre de 2015.

La anterior solicitud tiene como fundamento el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 y, la falta del requisito de estudio, por cuanto no allegó la certificación de estudios con el lleno de los requisitos que exige la Ley.

## **II. DEL TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR:**

Mediante auto de fecha 20 de abril de 2018 (fls. 23 al 24), se ordenó correr traslado a la señora DANNA ESTEFANIA CASTAÑEDA QUINCHIA, por el término de cinco (5) días, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., y S.S.

Dentro del término concedido, la entidad presenta escrito el 21 de junio de 2018, donde señala lo siguiente:

Aduce que las apreciaciones de la entidad demandada no corresponden a la realidad, pues la actora ha venido realizando sus estudios de manera ininterrumpida en el programa académico denominado INGENIERIA FORESTAL de la Universidad Francisco José de Caldas desde el año 2012-1 hasta el 2018-1, tal y como consta en el certificado expedido por la institución de educación superior de fecha 11 de junio de 2018.

De la misma forma manifiesta, que dichos certificados han sido aportados, sin que le sea dable a la entidad suspender la pensión de la

75

señora DANNA ESTEFANÍA, cuando esta ha cumplido con la carga impuesta.

Señala que mediante la Resolución Nª GNR 197610 del 2 de junio de 2015, le fue suspendido el derecho a DANNA ESTEFANÍA, decisión que fue ratificada por resoluciones posteriores que expidió la entidad, sin embargo la demandada manifiesta haber radicado acción de tutela -2016-00214, la que obtuvo fallo del Tribunal Superior de Bogotá- Sala Penal, quien en providencia de segunda instancia ordenó a COLPENSIONES valorar nuevamente los certificados de escolaridad y, restablecer el pago de la pensión. De esta manera solicita no decretar la medida cautelar, en virtud a que existe una protección por vía de tutela frente a los mismos derechos que se están discutiendo.

### III. PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

El artículo 230 del C.P.A.CA., las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.CA, la cual, se refiere a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo. Sin embargo, para la adopción de dicha medida, se requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma ibídem, el cual a la letra dice:

***“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por **violación de las disposiciones invocadas** en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (subrayado fuera de texto)***

*En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos: (...)*

76

Planteado lo anterior, se tiene, que el C.P.A.C.A. en el numeral 3 del artículo 230 contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, la que se encuentra condicionada a que el acto acusado contrarie de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, pues al requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte sentencia.<sup>1</sup>

Bajo los presupuestos enunciados con anterioridad, se absolverá la medida cautelar deprecada por la parte actora.

La solicitud presentada tiene sustento en que la actora no ha cumplido con los requisitos de estudio para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por cuanto no allegó la certificación de estudios con el lleno de los requisitos exigidos por el legislador. Es así que de la simple lectura de los textos jurídicos citados como base de la solicitud y el contenido de los actos acusados, no se puede llegar a concluir que el mismo no se ajusta a la legalidad, pues exige entrar a valorar el material probatorio arrimado al expediente, entre otras cosas, porque la demanda y la solicitud de medida provisional no son claras frente a qué requisitos dejó de cumplir la señora DANNA ESTEFANÍA, en cuanto a la demostración de sus estudios, pues obran dentro del expediente certificaciones de estudios radicadas ante la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES (fls. 41 al 49), que referían el cumplimiento de dicho requisito; ahora bien, también obra dentro del proceso el fallo de tutela proferido por Tribunal Superior de Bogotá- Sala Penal del 7 de marzo de 2017, dentro del expediente 2016-214 (fls. 62 al 68), donde se tutelaron los derechos de la señora DANNA ESTEFANÍA, ordenando a COLPENSIONES valorar las certificaciones de estudios aportadas en varias oportunidades y restablecer el pago de la mesada pensional de la actora, lo que debe ser valorado de forma

---

<sup>1</sup> C.E. , Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

77

detenida para emitir una decisión y, no ir en contra de lo que dispuso el Juez Constitucional en su momento.

En consecuencia, los presupuestos antes enunciados requieren de una valoración de las pruebas aportadas con el curso del proceso, lo cual, es una actividad propia de la sentencia, además es allí cuando debe definirse, como producto del debate que necesariamente debe surgir entre las partes, la capacidad de los documentos aportados en la demanda para desvirtuar la legalidad de los actos acusados, es decir, como la ilegalidad no surge a simple vista, como es la naturaleza de la medida cautelar, no es dable predicar una violación flagrante, de bulto, o prima facie, razón por la cual, se resolverá en forma adversa la medida cautelar solicitada.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** **NEGAR** la medida cautelar de suspensión provisional de suspensión provisional de los efectos de la Resolución GNR 6090 del 31 de enero de 2013 y GNR 197610 del 2 de julio de 2015, mediante los cuales la entidad ordena el reconocimiento de pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor CASTAÑEDA PINZON EDGAR, a favor de la señora CASTAÑEDA QUINCHIA DANNA ESTEFANÍA, identificada con la C.C. 1.022.395.551, en calidad de Hijo Mayor en cuantía mensual de \$566.700, efectiva a partir del 27 de mayo de 2012, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Se reconoce personería jurídica a la Doctora ERIKA MARIA RIVERA MUÑOZ, identificada con la C.C. 1.055.690.274 de Sora – Boyacá y T.P. 251.528 del C.S.J., como apoderada judicial de la señora DANNA ESTEFANÍA CASTAÑEDA QUINCHIA, identificada con la C.C. 1.022.395.551 de Bogotá D.C., en los términos y para los efectos del memorial poder conferido a folio 37 del cuaderno de medidas provisionales.

78

TERCERO: Notifíquese por estado esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

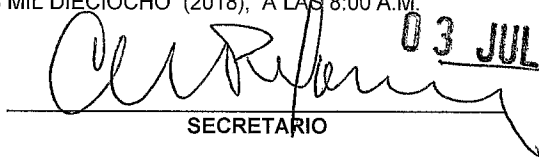
  
ROSSE MAIRE MESA CEPEDA  
JUEZ

catc

catc

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO  
CIRCUITO DE BOGOTA D.C.  
SECCION SEGUNDA

EL AUTO ANTERIOR .SE NOTIFICA A LAS PARTES  
EN ESTADO ELECTRONICO No. 25, A TRAVES DE LA PAGINA  
WEB WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, HOY        DE         
DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), A LAS 8:00 A.M.

  
SECRETARIO

03 JUL 2018